



Comunidad
de Madrid

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA,
TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

ORDEN DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE “OBRAS DE FINALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL ENLACE DE LA CARRETERA M-607 CON LA CARRETERA M-616 (MADRID)”. A/OBR-001493/2021.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - El gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó la celebración del contrato de “Obras de finalización de la remodelación del enlace de la Carretera M-607 con la carretera M-616 (Madrid)” mediante acuerdo de fecha 18 de mayo de 2021.

SEGUNDO. - Por orden de fecha 1 de diciembre de 2021, se adjudicó el contrato de referencia a la empresa INFRAESTRUCTURAS CONELSAN, S.A. con CIF: A83490003.

TERCERO. - El contrato fue formalizado en fecha 2 de febrero de 2022 con plazo de ejecución de 10 meses y con un precio de 1.682.819,60 euros, previa constitución de la garantía definitiva por importe de 69.538 euros, en la Tesorería de la Comunidad de Madrid que se acredita con número de resguardo de seguro de caución número 202155005030K de fecha 7 de octubre de 2021.

CUARTO. - Con fecha 2 de marzo de 2022 se firmó el Acta de comprobación del replanteo no autorizándose el inicio de las obras, por no haberse producido la aprobación del Plan de Seguridad y Salud para la obra objeto del contrato ni por lo tanto haberse dado cumplimiento a las obligaciones preceptivas antes del inicio de los trabajos.

QUINTO. - Mediante orden de fecha 12 de abril de 2022 se autorizó el inicio de las obras, con efectos del día 20 de abril de 2022.

SÉPTIMO. - Mediante orden del Consejero de Transportes e Infraestructuras de fecha 29 de marzo de 2023 se deniega la solicitud de resolución del contrato formulada por el contratista en fecha 18 de mayo de 2022.

OCTAVO. - Con fecha 20 de diciembre de 2022, el Subdirector General de Planificación, Proyectos y Construcción de la Dirección General de Carreteras emitió propuesta de resolución de contrato por la causa establecida en el artículo 211 d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP)

NOVENO. - En fecha 17 de julio de 2023 se dictó orden de inicio del expediente de resolución del contrato.

DÉCIMO. - Con fecha 16 de abril de 2024 se declara la caducidad del expediente y el archivo de las actuaciones.

DÉCIMO PRIMERO. - Con fecha 29 de abril de 2024, la Dirección General de Carreteras emitió propuesta de resolución de contrato por la causa establecida en el artículo 211 d) de la LCSP.

DÉCIMO SEGUNDO. - En fecha 9 de mayo de 2024 se dictó orden de inicio del expediente de resolución del contrato.

DECIMO TERCERO. - Con fecha 7 febrero de 2025 se declara la caducidad del expediente y el archivo de las actuaciones.

DÉCIMO CUARTO - Con fecha 12 de febrero de 2025, la Dirección General de Carreteras emitió propuesta de resolución de contrato por la causa establecida en el artículo 211 d) de la LCSP.

DÉCIMO QUINTO. - En fecha 14 de febrero de 2025 se dictó orden de inicio del expediente de resolución del contrato.

DÉCIMO SEXTO. - El 14 de febrero de 2025 se concede plazo de alegaciones de diez días hábiles al contratista que recibe la notificación en la misma fecha y al avalista.

DÉCIMO SÉPTIMO. - El 20 de febrero de 2025 el contratista presenta alegaciones al expediente de resolución. El avalista no ha presentado alegaciones en el plazo legal concedido.

DECIMO OCTAVO. - El día 6 de marzo de 2025 la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha informado favorablemente el expediente de resolución.

DÉCIMO NOVENO. - La Intervención General el día 17 de julio de 2025 ha informado favorablemente.

VIGÉSIMO. - La Comisión Jurídica Asesora ha emitido dictamen en día 24 de septiembre de 2025.

VIGÉSIMO PRIMERO. - El Consejo de Gobierno en sesión del 15 de octubre de 2025 ha autorizado la resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) Régimen jurídico del contrato.

PRIMERO. - La cláusula segunda del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato dispone que “el presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido la LCSP, rige el Real Decreto

817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCCPM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. “

B) Régimen Jurídico de la causa de resolución por demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista

SEGUNDO. - Artículo 209 de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP que establece que los contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución.

TERCERO. - El artículo 211.1.d) de la LCSP establece como causa de resolución del contrato la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.

Al respecto, la propuesta de la Dirección General de Carreteras, de fecha 12 de febrero de 2025, manifiesta: *“Habiendo producido el inicio de las obras el 20 de abril de 2022, siendo el plazo total para la ejecución de las mismas de 10 meses y no habiéndose iniciado ninguna de las actividades del plan de trabajos, desde la Unidad Promotora se considera justificado proponer la resolución del contrato.”*.

C) Alegaciones formuladas por el contratista:

CUARTO. - Consideraciones del contratista incluidas en las alegaciones presentadas el día 20 de febrero de 2025:

Cita en su escrito el contratista que “el 16/04/2024 se ordena la caducidad y el archivo del expediente y el 09/05/2024 se vuelve a reabrir dicho expediente hasta que con fecha 10/02/2025 se ordena la caducidad y el archivo del expediente, que por 3ª vez se reabre el 14/02/2025, en una nueva nulidad de manual en la que se vuelve a reabrir el expediente ya caducado y archivado y se nos da traslado para que en el plazo de 10 días aleguemos lo que a nuestro derecho convenga contra la resolución por la que en su apartado segundo se acuerda retener la garantía definitiva por importe de 69.538€ hasta la determinación de los daños y perjuicios irrogados a la Administración contratante.

Al respecto citar que la orden que declara la caducidad del expediente de resolución de contrato se ampara en el artículo 25.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que remite al artículo 95 de la misma ley que dice que” *En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse*

producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado por lo que es posible iniciar un nuevo procedimiento de resolución de contrato, dándose de nuevo, como es el caso, audiencia al interesado.

En su escrito de alegaciones, el contratista manifiesta que *“hace suyos todos los escritos y alegaciones ya presentados.....escritos en los que esta parte se ratifica íntegramente a los efectos legales oportunos”*

Cita en su escrito el contratista que *“el 08/03/2022 se solicitó por parte de la empresa, la revisión de precios del contrato porque los precios de las materias primas habían sufrido un incremento desorbitado y totalmente imprevisible, lo que conlleva que deba corregirse el grave desequilibrio económico que ello ha generado a la empresa, reconociéndose al contratista su derecho a actualizar o revisar los precios del Contrato. Dicho escrito inicial de revisión de precios del 08/03/2022 nunca fue contestado por la Comunidad de Madrid”*

Al respecto de la solicitud de revisión de precios formulada por la empresa contratista mediante escrito de 08/03/2022, la Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de la Dirección General de Carreteras, en su informe de fecha 14 de marzo de 2024 sobre las alegaciones presentadas por el contratista con fecha 28 de julio de 2023, en el procedimiento de resolución de contrato del que se declaró la caducidad con fecha 15 de abril de 2024, cita que *“esta área informó tras petición mediante informe de 15/7/2022.”*

El citado informe recoge las siguientes:

“IV.- Conclusiones.

- ☐ Según lo dispuesto en la LCSP, no procede la revisión de precios del contrato.
- ☐ Tras la entrada en vigor del RDL 6/2022 por el que se modifica el RDL6/2022, el contrato referido en el asunto pasa a estar incluido entre los casos susceptibles de revisión excepcional de precios.
- ☐ No se considera que actualmente CONELSAN haya solicitado la revisión excepcional de precios al amparo del RDL 3/2022 y según el procedimiento descrito en dicho texto.”

En su escrito de alegaciones cita *“Que como le consta a esa Dirección General el plazo para la presentación de ofertas finalizó el 17/06/2021 y el procedimiento de licitación de dicho Contrato se abrió el 24/06/2021. Finalmente, el contrato fue adjudicado a INFRAESTRUCTURAS CONELSAN, S.A. el 01/12/2021, con un plazo de ejecución de obras de 10 meses. La firma del documento se produjo el 02/02/2022, luego es una obra que está licitada con precios del 2021 sin tener en cuenta el alza de los precios de las materias primas.*

Quinta.- Que en el escrito de 08/03/2022 la empresa se reiteró en que la subida de precios es mayor del 20 % a pesar de la fórmula de revisión de precios, dado que en esos momentos la obra se encontraba con un déficit del proyecto de 620.715,44€ derivados de -505.414,57€ del aumento de los precios y de 115.300,87€ de la diferencia de edición sobre el proyecto licitado, lo que hacía inviable la continuación de la empresa en la ejecución de dicho proyecto, todo ello en base al análisis de las unidades de obras más significativas (movimiento de tierras y mezclas bituminosas en caliente) a ejecutar en los diferentes ejes de Proyecto. Ese análisis arroja que tal y como se ha contemplado la solución de Proyecto, y por tanto la medición del mismo, existían una serie de detalles

técnicos y constructivos que son inejecutables, o bien que en caso de ejecutarse comprometen la calidad y durabilidad de las obras ejecutadas, con una diferencia de medición que se traduce en un incremento de coste agravado por el incremento de los precios.

En la sexta alegación del escrito expone “que por todo ello, se han alterado sustancialmente las condiciones de ejecución del Contrato, de modo que la prestación pactada resulta mucho más onerosa para una de las partes de lo que inicialmente podía preverse (lo que cumple la doctrina de la STS de 18 de abril de 2008; y han sobrevenido, con carácter extraordinario, circunstancias que alteran de forma muy notable el equilibrio económico y contractual existente en el momento del contrato pues sobrepasan los límites razonables de aleatoriedad que comporta toda licitación; ha aparecido un riesgo anormal que cercena el principio del equilibrio económico-financiero entre las partes (tal como exige la STS de 25 de abril de 2008), y mi representada el 18/05/2022, solicitó que se reconociera su derecho a la resolución del contrato conforme al artículo 211 LCSP de 2017:

c) “El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista” y/o g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en los artículos 204 y 205 LCSP de 2017; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, debido al exorbitante aumento de los precios de las materias primas.

La Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de la Dirección General de Carreteras, en su informe de 14 de marzo de 2024 sobre las alegaciones presentadas por el contratista el 28 de julio de 2023 en el expediente de resolución de contrato que se declaró la caducidad por Orden de 16 de abril de 2024, cita que “Al respecto de los comentarios de la empresa contratista “la diferencia de edición sobre el proyecto licitado” y “existían una serie de detalles técnicos y constructivos que son inejecutables, o bien que en caso de ejecutarse comprometen la calidad y durabilidad de las obras ejecutadas, con una diferencia de medición que se traduce en un incremento de coste agravado por el incremento de los precios”. Cita que “se expone lo siguiente: son repetidas las ocasiones en que la empresa contratista en sus solicitudes hace alusión a diferencias entre sus mediciones y las del proyecto, o a soluciones constructivas contenidas en el proyecto cuya idoneidad no comparten. Esta área se reitera en las afirmaciones incluidas en el informe emitido el 21 de junio de 2022.

La diferencia de medición que expresa en su solicitud no está contrastada con la Dirección de Obra y por lo tanto no se aprueba su validez.

Se expuso en el momento de la comprobación del replanteo este hecho y desde esta Área se detectaron errores en la consideración de la medición de la obra por parte de la contratista que no se llegaron a presentar subsanados por no continuar con el estudio previo a la ejecución de las obras.

En cualquier caso, cualquier discordancia o falta de exactitud de las mediciones del proyecto se recoge en las mediciones que se realizan en la obra de las unidades ejecutadas y se pagan a los precios recogidos en la oferta y en el contrato. Estas desviaciones, en estos momentos, se prevén de poca entidad por no haberse detectado errores de proyecto.”

Se recoge en el informe citado de 14 de marzo de 2024 de la Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción que *“En cuanto a la consideración de la empresa contratista sobre “detalles constructivos que son inejecutables, o bien que comprometen la calidad y durabilidad de las obras”, esta área informa que dichas afirmaciones no se consideran correctas, pues la solución técnica proyectada es, no solo ejecutable, sino ajustada a normativa y está apropiadamente recogida en el proyecto de construcción y por tanto en los documentos contractuales aceptados por la empresa al presentar su oferta, aceptar la adjudicación y formalizar el contrato.”*

En el apartado séptimo de sus alegaciones el contratista indica *“Que la respuesta negativa de la Comunidad de Madrid nos fue comunicada el 22/12/2022, esto es 7 meses y 4 días después, cuando la orden de inicio de los trabajos tenía fecha de 12/04/2022, con lo cual al plazo de ejecución de la obra de 10 meses apenas le quedaban menos de 2 meses para su cumplimiento, lo que a esta parte le causó una gravísima indefensión, amén de que entendemos que la comunicación recibida de la Comunidad de Madrid podría estar fuera del plazo legal de contestación con lo cual se encontraría ya prescrita.*

Dicha contestación deniega nuestra solicitud indicando que en el informe de la Dirección General de Carreteras de 15/11/2022 respecto a la causa del art 211 c) debido “a que desde el punto de vista técnico no se estima que existan razones de interés público que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, siendo pertinente añadir que se trata de lo contrario, pues no han desaparecido los motivos y necesidades que condujeron a la redacción del proyecto de construcción de la remodelación del enlace de la carretera M-607 con la M-616 y su posterior licitación, los cuales obedecían y obedecen al interés general” y en cuanto a la solicitud de resolución por causa del artículo 211.1.g) se indica “que no existe imposibilidad técnica de ejecutar la obra y no es necesario por tanto el estudio de una modificación de la obra”.

La fecha correcta del inicio de los trabajos es el 20 de abril de 2022.

La solicitud de resolución del contrato formulada por el contratista se resolvió con fecha 29 de marzo de 2023, notificada y recibida por el contratista en esa misma fecha, mediante la Orden del Consejero de Transportes e Infraestructuras de fecha 29 de marzo de 2023 por la que se deniega la solicitud de resolución del contrato de fecha 18 de mayo de 2022, con base en los informes ya citados de fechas 21 de junio, 8 de julio y 15 de noviembre de 2022 de la Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de la Dirección General de Carreteras, informes que le fueron remitidos al contratista en contestación a la petición de los mismos de 9 de enero de 2022, en los que se recogen las causas de denegación de dicha solicitud.

La Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de la Dirección General de Carreteras, en su informe de fecha 14 de marzo de 2024 sobre las alegaciones presentadas por el contratista el 28 de julio de 2023, expone *“Al respecto de la solicitud de resolución de la empresa contratista por las causas c) y/o g) contempladas en el artículo 211 de la LCSP, esta área ya informó sobre las consideraciones a realizar en su ámbito de competencia en el informe emitido el 15 de noviembre de 2022 y previos, y sobre ello no se aprecian más aclaraciones que añadir.”*

Por tanto, remitiéndonos al citado informe emitido el 15 de noviembre de 2022, de la Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de la Dirección General de Carreteras, se recoge lo siguiente:

“Desde el Área de Proyectos y Construcción se considera que no ha de reconocerse la causa de resolución recogida en el artículo 211. c) debido a que, desde el punto de vista de técnico, no se estima que existan razones de interés público que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, siendo pertinente añadir que se trata de lo contrario, pues no han desaparecido los motivos y necesidades que condujeron a la redacción del proyecto de construcción de la remodelación del enlace de la carretera M-607 con la M-616 y su posterior licitación, los cuales obedecían y obedecen al interés general.”

“Respecto al derecho a la resolución del contrato conforme al artículo 211 punto g) de la LCSP: Desde el Área de Proyectos y Construcción se afirma que no existe imposibilidad técnica de ejecutar la obra y no es necesario por tanto el estudio de una modificación de la obra”

Cita en el apartado octavo de su escrito el contratista *“Que esta parte el 09/01/2023 presenta 2das alegaciones contra el informe relativo a la solicitud de resolución del contrato denegando la solicitud efectuada por la empresa el 18/05/2022, en las que indica que ya propuso verbalmente, e insiste en que la mejor solución es un modificado técnico de la obra en base a las mejoras: técnicas, medioambientales y de mayor calidad, respecto a la modificación de la sección definida en el proyecto para los ejes 1, 2, 3, 5, 6 y 7.*

El modificado técnico solicitado consiste:

- En sustituir la sección 221 de la Norma 6.1 IC, contemplada en el proyecto, por la 231 de la misma norma.*
- Con dicho cambio, se sustituye la explanada E2 formada por 75 cm de suelo seleccionado con CBR> 12, por 30 cm del suelo de la traza estabilizado in situ con cemento. Este cambio supone también la reducción en 5 cm del espesor de mezclas bituminosas.*
- El propio proyecto de la obra contemplaba la utilización de la sección que se propone y llegaba a la conclusión de que: “la solución de firme y explanada E3 es ligeramente más económica, pero el escaso valor absoluto de la diferencia económica y la mayor complejidad operativa para una obra de tan poco volumen que supone la estabilización con cemento de suelos de la traza que hay que acopiar, siendo preciso, en cualquier caso recurrir a suelos seleccionados de aportación, hace más recomendable disponer una explanada de categoría E2 en toda la traza”.*

En el apartado noveno, se reitera indicando que

Que a pesar de lo dicho en el oficio de la CAM notificado el 22/12/2022 de que el expediente completo se encontraba en el Área de Contratación Administrativa (contratación.transportes@madrid.org), esta parte una vez dentro del expediente no pudo

localizar informáticamente los informes citados en los antecedentes de hecho, punto séptimo: “informes de 21/06/2021, 08/07/2021 y 15/11/2021 del Subdirector General de Planificación, Proyectos y Construcción de la Dirección General de Carreteras”, con lo cual a esta parte se lo ocasiona una clarísima indefensión a la hora de redactar sus alegaciones, porque no sabe en qué consisten los mismos y que razones aducen dichos informes para ir en contra de la resolución del contrato de mutuo acuerdo solicitada.

El 9 de enero de 2023 el contratista presenta alegaciones en las que se reitera la petición de resolución formulada con fecha 18 de mayo de 2022 de resolución por mutuo acuerdo. En su escrito solicita la ampliación del plazo de audiencia y documentación del expediente. Con fecha 13 de enero de 2023 se le comunica que no procede la ampliación del plazo para alegaciones dado que el plazo está vencido y se le remite la documentación solicitada. La citada comunicación junto con la documentación solicitada es recibida por el contratista con fecha 13 de enero de 2023.

En relación a la modificación de la obra, el escrito de alegaciones recoge en el punto décimo *“Que con fecha 02/02/2023 mi representada recibió notificación de celebración de acto de comprobación material de obras ejecutadas sin comparecencia del representante de la empresa y de conformidad con el artículo 164 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre se nos remitió un ejemplar del acta firmada por los comparecientes para que en el plazo de 10 días formulara las alegaciones que considere oportunas y dentro del plazo concedido la empresa indicó que no se personó a la firma del acta de comprobación material de obras ejecutadas, previa a la resolución del contrato, hasta en cuanto no sepa en qué condiciones se firma la resolución del contrato, y si se van a resolver sus alegaciones presentadas el 09/01/2023 y si se va a proceder a aprobar, entre otras cuestiones planteadas, el modificado de las obras para poder ejecutar las mismas.*

En sus alegaciones (puntos undécimo y duodécimo) el contratista indica lo siguiente:

“Que con fecha 29/03/2023 mi representada recibió “Orden de denegación de solicitud de resolución del contrato en la que se nos indica:

- *Que desde el punto de vista técnico no han desaparecido los motivos y necesidades que condujeron a la redacción del proyecto de construcción de la remodelación del enlace de la carretera M-607 con la M-616 y su posterior licitación, los cuales obedecían y obedecen al interés general.*
- *Que no existe imposibilidad técnica de ejecutar la obra y por tanto no cabe la resolución del contrato por mutuo acuerdo*
- *Que no es necesario, por tanto, el estudio de una modificación de la obra.*
- *Que la diferencia de medición no está contrastada con la Dirección de obra. En cualquier caso, estas desviaciones se prevén de poca entidad por no haberse detectado errores de proyecto.*

Que el modificado técnico propuesto por la empresa en base a las mejoras técnicas, medioambientales y de mayor calidad, respecto a la modificación de la sección definida en el proyecto para los ejes 1, 2, 3, 5, 6 y 7, ya se expuso con detalle en nuestro escrito de 09/01/2023.

Pues bien, sin entrar a valorar el mismo la CAM lo despacha simplemente con un:” No es necesario, por tanto, el estudio de una modificación de la obra” y ninguna consideración técnica se hace al mismo y a la viabilidad y a la mejora que supone en sí para el Proyecto.”

El informe de la Dirección General de Carreteras de fecha 15 de noviembre de 2022 señala que “no es necesario por tanto el estudio de una modificación de la obra” tal y como recoge la orden del Consejero de Transportes e Infraestructuras de fecha 29 de marzo de 2023 se deniega la solicitud de resolución del contrato formulada por el contratista.

En lo referente al exceso de mediciones, punto decimotercero, el contratista alega “Que el exceso de medición, reconocido en email por la Dirección Técnica, ya se nos dijo en reuniones por parte de la CAM que se nos pagaría lo que resultase por lo cual parece que ese no es el problema. Ahora se nos dice que no están contrastadas por la Dirección Técnica y que, en cualquier caso, estas desviaciones se prevén de poca entidad por no haberse detectado errores de proyecto.

Pues bien, dicha diferencia de medición se traduce en un incremento de coste y en un déficit del proyecto de -115.300,87€ de la diferencia de edición sobre el proyecto licitado, y si entendemos que es una cifra de entidad como para ser valorada y tenida en cuenta antes de la ejecución completa del Proyecto”.

En referencia a esta cuestión, tal y como recoge el informe de la Dirección General de Carreteras de fecha 15 de noviembre de 2022, “La diferencia de medición que expresa en su solicitud no está contrastada con la Dirección de Obra y por lo tanto no se aprueba su validez. Se expuso en el momento de la comprobación del replanteo este hecho y desde esta Área se detectaron errores en la consideración de la medición de la obra por parte de la contratista que no se llegaron a presentar subsanados por no continuar con el estudio previo a la ejecución de las obras. En cualquier caso, cualquier discordancia o falta de exactitud de las mediciones del proyecto se recoge en las mediciones que se realizan en la obra de las unidades ejecutadas y se pagan a los precios recogidos en la oferta y en el contrato. Estas desviaciones, en estos momentos, se prevén de poca entidad por no haberse detectado errores de proyecto. “

En el punto decimocuarto del escrito de alegaciones de 17 de mayo de 2024, el contratista cita “que esta parte el 28/04/2023 presentó recurso de reposición contra dicha “Orden de denegación de solicitud de resolución del contrato de “OBRAS DE FINALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL ENLACE DE LA CARRETERA M-607 CON LA CARRETERA M-616 (MADRID)” A/OBR- 001493/2021” notificada el 29/03/2023 en la que solicita que se acuerde la resolución del contrato conforme al artículo 211 LCSP de 2017: c) y/o g), debiendo tenerse en cuenta los posibles plazos de prescripción aludidos en anteriores escritos que constan en el expediente en las contestaciones por parte de la CAM.”

La resolución del recurso de reposición de fecha 21 de agosto de 2023, por la que se desestima el recurso interpuesto, le fue notificada al contratista con fecha 10 de noviembre 2023 y recibida por el mismo en 13 de noviembre de 2023.

El contratista finalmente, solicita, “Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma se sirva admitirlo, y realizadas las alegaciones que en este escrito se contienen y, previos los trámites procedimentales que proceden se acuerde en primer lugar la nulidad del nuevo expediente de resolución del contrato A/OBR-001493/2021 y en segundo lugar se proceda a la devolución a esta parte de la garantía definitiva por importe de 69.538€

depositada en la Tesorería de la CAM con fecha 07/10/2021 con el nº de resguardo de seguro de caución nº 202155005030K por caducidad del expediente.

Como ya se ha citado, la orden que declara la caducidad del expediente de resolución de contrato se ampara en el artículo 25.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que remite al artículo 95 de la misma ley que dice que *“En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado”* por lo que es posible iniciar un nuevo procedimiento de resolución de contrato, dándose de nuevo, como es el caso, audiencia al interesado.

La Dirección General de Carreteras en su informe de fecha 12 de febrero de 2025 solicita, a los efectos oportunos, que se proceda a retener el importe de la garantía, en tanto se incoa el procedimiento contradictorio para la determinación de los daños y perjuicios.

D) Sobre los efectos de la resolución

QUINTO. - El artículo 213.3 de la LCSP establece que “Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.”

El artículo 213.5 de la LCSP dispone que “En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.”

En relación a lo señalado la doctrina del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid viene a establecer que “con carácter general, lo procedente es que el acuerdo de resolución disponga la no incautación de la garantía sin perjuicio de su retención a resultas de la liquidación de los perjuicios en procedimiento contradictorio” (Dictámenes 1/13, 646/12 y 84/14 y Dictamen 516/2016 de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.

El artículo 111 de la LCSP regula la devolución y cancelación de las garantías.

La Dirección General de Carreteras en su informe de fecha 12 de febrero de 2025, solicita, a los efectos oportunos, que se proceda a retener el importe de la garantía, en tanto se incoa el procedimiento contradictorio para la determinación de los daños y perjuicios en aras de garantizar el pago que pueda derivarse del importe de los daños y perjuicios causados por la resolución del contrato una vez se determine su valoración en el expediente contradictorio que al efecto se inicie.

E) Sobre el procedimiento.

SEXTO. - En materia de procedimiento, el extinto Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid en el Dictamen 545/2015, distingue entre la normativa aplicable al procedimiento y la norma sustantiva aplicable al contrato y establece que la normativa procedimental a aplicar es la vigente al momento de iniciarse el procedimiento de resolución del contrato,

siendo por tanto aplicable la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público (LCSP) y el RGLCAP.

SEPTIMO.- El artículo 190 de la LCSP establece que “dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta”.

OCTAVO. - El artículo 191 de la LCSP regula el procedimiento de ejercicio de las prerrogativas de la Administración:

1. “En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contratista.
2. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos previstos en los artículos 109 y 195.

NOVENO. -Por su parte, el artículo 109 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) desarrolla el procedimiento para la resolución de los contratos estableciendo:

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el último párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes:
 - a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.
 - b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador, si se propone la incautación de la garantía.
 - c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la Ley.
 - d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente”.

DÉCIMO. - De conformidad con el apartado 3.9 del Anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, de la Comunidad de Madrid, por la que se establece la duración máxima y el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos el plazo aplicable para

los procedimientos de resolución de contratos administrativos iniciados de oficio es el de 8 meses.

d) Sobre la competencia para resolver.

La competencia en materia de contratación le viene atribuida a esta Consejería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, en el Decreto 38/2023, de 23 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, Decreto 76/2023, de 5 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid y en el Decreto 244/2023, de 4 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

El órgano de contratación de la Consejería es el Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras que, mediante orden de 27 de diciembre de 2023, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en fecha 2 de enero de 2024, delegó el ejercicio de la competencia de resolución para este contrato en el Viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

Con base en todo lo anteriormente expuesto, previo informe favorable de la Abogacía General, de la Intervención y la autorización del Consejo de Gobierno:

ORDENA

- 1- Resolver, el contrato de “Obras de finalización de la remodelación del enlace de la Carretera M-607 con la carretera M-616 (Madrid)”, suscrito con la empresa INFRAESTRUCTURAS CONELSAN, S.A. por demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
- 2- Incautar la garantía definitiva por importe de 69.538 euros, depositada en la Tesorería de la Comunidad de Madrid con fecha 7 de octubre de 2021 con número de resguardo de seguro de caución número 202155005030K, hasta la determinación de los daños y perjuicios irrogados a la Administración contratante.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden 27.12.23, BOCM 2.1.2024)
EL VICECONSEJERO

Firmado digitalmente por: GARCIA GOMEZ JOSE MARIA
Fecha: 2025.10.16 19:58